

actividad que dañe o afecte “El Parque Morales”, así como la inmediata suspensión y/o interrupción de permisos, licencias y/o anuencias, en caso de existir, de cualquier acto o actividad que dañe los ecosistemas del Parque Morales y su entorno.

Además del contenido de su demanda, también se advierte que pide se conceda la suspensión para que **no se ejecuten trabajos de deforestación, tala, corte, derribo y/o afectación al parque Morales.**

Finalmente, solicita la suspensión para que se **retenga, resguarde e inmovilice**, la cantidad de **\$100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 moneda nacional)**, que según indica, se encuentran asignados para la remodelación del parque Morales, y, que dichos recursos **se mantengan en una partida específica, debidamente identificada, y resguardada, para evitar que dichos fondos sean utilizados en otras obras o desviados para fines distintos, hasta que se resuelva el fondo del asunto.**

TERCERO. Actos inexistentes.

No son ciertos los actos que la parte quejosa atribuye a las autoridades responsables **Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí; Secretario General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí; Secretario de Finanzas del Estado de San Luis Potosí; Secretario de Desarrollo Económico; Coordinador General de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí; Presidente Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí; Titular de la Comisión de Desarrollo y Equipamiento Urbano del Ayuntamiento**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

remodelación, lo que también evitaría un daño al parque, y la conservación de la materia del amparo, además de asegurar la ejecución racional de ese proyecto.

Pues bien, **la suspensión definitiva** solicitada en cuanto a dicho tópico, **es improcedente y debe negarse**, pues no se satisface el segundo de los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que, el otorgamiento de la medida cautelar en los términos solicitados, traería como consecuencia la afectación del interés social y contravendría disposiciones de orden público.

Para arribar a lo anterior, se estima pertinente traer a contexto, la porción relativa del artículo 128 de la Ley de Amparo, del tenor literal siguiente:

***“Artículo 128.** Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:*

I. Que la solicite el quejoso; y

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.”

Ahora bien, del contenido de las hipótesis que contempla el artículo en cita, adminiculado con el diverso 129 de la Ley de Amparo, se obtiene que, entre otros casos, se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.

RICARDO DAVID RUIZ GARCIA
70666623058666620000000000000000000074
22/01/25 10:12:43



que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión.

Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo."

Por lo señalado, con fundamento en los dispuesto por los artículos 128, 143 y 144 de la Ley de Amparo, se **niega la suspensión definitiva solicitada**, respecto del resguardo presupuestal que pide la parte quejosa, para asegurar la realización de la obra de rehabilitación del Parque Morales.

SEXTO. Suspensión definitiva concedida.

Por otro lado, en cuanto a la **afectación ambiental** que aduce la parte quejosa, al **Parque de Morales**, posible **deforestación, tala, corte, derribo y/o afectación de los árboles que forman parte de dicho parque urbano**; así como, en caso de existir las consecuencias de **permisos, licencias y/o anuencias, o cualquier acto o actividad cuya finalidad sea dañar el ecosistema del Parque Morales**, la suspensión solicitada es procedente, como enseguida se explica



cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infliere un daño que de otra manera no resentiría.”

Al respecto, el requisito precisado en el punto I se encuentra acreditado, en principio porque la persona quien insta la suspensión de los actos reclamados es **Luis González Lozano**, en su carácter de Director General de **“Cambio de Ruta”, Asociación Civil**.

En cuanto al requisito precisado en el punto II, consistente en que se acredite el interés suspensional, se satisface con los motivos expuestos por la parte quejosa en su escrito de demanda, el cual refiere bajo protesta de decir verdad, en los antecedentes del acto reclamado, por lo que hace a la persona física ser ciudadano de esta ciudad, y respecto de la persona jurídica, de la copia del instrumento notarial número catorce mil setecientos treinta y siete, tomo trigésimo vigésimo octavo tirada ante la fe del notario público número dieciséis, con ejercicio en la ciudad de San Luis Potosí; se advierte que su objeto social consiste en la promoción, prevención y control de la contaminación del agua, del aire y del suelo, la protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 5/93, con número de registro 206395, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, número 68, agosto de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

“SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS

MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo.”

En lo que respecta al III requisito se tiene satisfecho, toda vez que con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y de no concederse la suspensión de los actos solicitada por la parte quejosa, se causarían al impetrante daños y perjuicios de difícil reparación.

Aunado a los requisitos anteriormente mencionados, a efecto de conceder la suspensión, el juzgador también debe analizar en forma simultánea (en forma ponderada) lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, los cuales estipulan, en esencia, dos aspectos:

- 1)** La apariencia del buen derecho, y;
- 2)** El peligro en la demora.

Esto es, al proveer sobre la suspensión, el juzgador de amparo deberá atender a la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, lo cual implica analizar la probabilidad de otorgar el amparo solicitado y valorar la

peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Con la posibilidad de revocar la suspensión definitiva si surgen elementos que modifiquen la valoración sobre la afectación al interés social y el orden público, previa vista al quejoso (artículo 139).

De igual forma, de considerarse procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para hacer conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensiva siga surtiendo efectos (primer párrafo del artículo 147).

Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo (segundo párrafo del artículo 147).

Pues bien, como se adelantó, en el caso, la parte quejosa acreditó su interés legítimo, en razón de que una posible afectación a la flora y fauna del **Parque urbano de**

de Durango, sin hacer valer una calidad específica que los sitúe frente a los actos reclamados de manera especial o diferente, como sería pertenecer a un grupo determinado, tener cercanía al evento o suceso, o ser titular de algún derecho. Tampoco exhibió constancia alguna que acreditara un daño inminente e irreparable que pueda causarle la ejecución de la obra. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión.

*Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en materia ambiental está sujeto a la actualización de los requisitos y presupuestos señalados en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General, 128, 131, 136 y 138 de la Ley de Amparo; sin embargo, también debe integrarse al parámetro que regula dicha institución a las normas convencionales que consagran los principios del derecho medioambiental, como son *in dubio pro natura*, *precautorio* (o de precaución) y de acceso a la justicia ambiental, contenidos en distintos instrumentos internacionales, destacadamente en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Convenio de Escazú). Así, la suspensión debe servir como un auténtico mecanismo que permita prevenir, mitigar y reparar los daños al medio ambiente.*

Justificación: La suspensión del acto reclamado en materia medioambiental dentro del juicio de amparo se alza como una institución que trasciende su antigua posición de medida cautelar paralizante de los actos reclamados para convertirse, en ciertas condiciones, en una medida de tutela anticipada central para nuestro modelo de justicia medioambiental. La justicia medioambiental es un componente necesario del modelo de democracia constitucional, ya que el derecho a la protección del medio ambiente se ha convertido en una norma jurídica suprema, que ha servido como cimiento para la construcción del denominado Modelo de Estado Medio Ambiental de Derecho, adoptado por nuestro parámetro de control constitucional; por ello, los Jueces y las Juezas constitucionales deben utilizar este derecho humano como parámetro de control para determinar la regularidad de cualquier acto de autoridad, pero también como pauta interpretativa para ajustar las categorías procesales del juicio de amparo para la protección del medio ambiente como bien jurídico objetivo. Por ello, debe concluirse que el juicio de amparo debe reinterpretarse para ajustarse a las exigencias de los estándares internacionales en materia de justicia medioambiental. Así, del Convenio de Escazú destaca el artículo 8, numeral 3, incisos c) y d), que establece la exigencia de reconocer legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, de conformidad con la legislación nacional, así como la posibilidad de disponer de medidas cautelares y provisionales para, entre otros fines, prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente. Por su parte, el mismo artículo 8, numeral 4, inciso a), establece la obligación de facilitar el acceso a la justicia del público en asuntos ambientales, por lo que deberán establecerse medidas para reducir o eliminar barreras al

proyecto no ha ejecutado acto alguno que tenga por objeto dañar el ecosistema de dicho Parque, puesto que no se contempla el desalojo o eliminación de plantas y árboles y/o afectación de los árboles que forman parte de dicho parque urbano, y, que por el contrario, de acuerdo con el oficio **ECO.03.7352/2024**, de fecha veintinueve de abril de dos mil veinticuatro, emitido por el Director de Gestión Ambiental de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, por el que se emite Dictamen Instruccional del Arbolado del referido proyecto, dicha autoridad se encuentra en todo momento observante y vigilante de las medidas ambientales señaladas.

Pues lo cierto es, que lo expresado por tales autoridades no resulta suficiente para modificar los efectos de la suspensión concedida, en la medida en que se trata de alegatos que por sí solos no demuestran sus afirmaciones en el sentido de que el Proyecto en mención, efectivamente protege el ecosistema del referido parque urbano; además, se estima que tampoco lo expresado por tales responsables se contrapone con los efectos de la medida suspensiva que en forma definitiva fue obsequiada, si se toma en consideración que lo se persigue es salvaguardar el ecosistema de dicho Parque.

Resta decir, que como se indicó en la parte final del considerando cuarto de la presente incidencia, obra en autos el desahogo de la **prueba de inspección judicial** de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro llevada a cabo por la Actuaría adscrita a este órgano jurisdiccional, cuyo valor probatorio es pleno, de acuerdo con el numeral 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el ordinal 143 de la Ley de Amparo,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

95425049_0226000035541817045.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	RICARDO DAVID RUIZ GARCIA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.aa.74	Revocacion:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	06/12/24 05:10:30 - 05/12/24 21:10:30	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	34 b8 e9 0b ac 35 36 f8 f4 a4 81 ab 7e de dc cd 9e 1d 3a 8c d7 22 47 43 c6 ca 31 32 ed ba 99 f7 ab 4b 7e 0d ce 36 4f f6 af 6f 33 c4 37 e1 2b 2a fb fd 71 e2 66 ab 54 f7 e0 75 f3 61 95 04 d2 4b 36 15 c5 b8 02 4c 50 b7 a2 d3 38 13 48 ad b1 d1 08 92 a0 a2 7c 76 f1 6f e4 f5 e2 3b 59 b5 a2 f9 80 fa 4d aa 72 93 28 c9 e0 5b 20 33 10 15 88 d7 c8 11 e9 13 31 ed e8 4d 80 7f c8 ce a2 f6 be b4 77 7d 79 06 f2 73 28 cd 4e 99 26 09 4d ab 58 65 9e 88 dd 10 cb 3d 2c 49 95 24 2c 36 c0 8b 30 04 5f a1 42 79 7c d2 03 46 58 64 17 61 4a 47 ca 05 d1 d9 c8 c4 65 fd 21 e1 36 d1 6b a2 6b 5f 9c 01 99 3a a2 ad 18 8d ae eb f2 36 97 2d 22 57 1b 4a c1 29 b7 47 82 60 fb 65 17 58 9c 77 e2 05 fb bf 31 6c 30 2c 6e 89 85 7b 21 9a 76 30 d9 f0 44 57 93 b9 36 d1 b3 f1 29 4a b2 96 bc 9b a4 a8 e4 91			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CMDX)	06/12/24 05:10:30 - 05/12/24 21:10:30			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.aa.74			
TSP				
Fecha : (UTC/ CMDX)	06/12/24 05:10:31 - 05/12/24 21:10:31			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	197163394			
Datos estampillados:	2holc9cHHk92GiDAN6hh/8Hyggw=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	ANA LEY FLORES SANCHEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.51.27	Revocacion:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	06/12/24 05:35:57 - 05/12/24 21:35:57	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	0f 31 85 2f d3 0b ce 2b 94 34 7e 9b e5 28 32 fd 4b 54 a7 69 ed eb e3 c3 58 7a 40 80 7d 7a b0 c0 9a 20 9a 31 c9 83 d9 44 55 02 6b 8e 3b 45 75 25 8e b9 f5 20 56 c1 81 83 db 26 2e bb 50 30 f6 f6 db 27 41 52 ce 3b 8f a9 b9 1c f4 76 48 36 c6 77 3a 72 9e 1a f3 57 3f 09 06 75 ec a6 eb b9 e7 d4 20 bc 5a 15 7a bf b2 58 b0 6f 54 c3 22 75 33 d0 9b 3d 88 ae b2 6b d8 27 ee 34 92 c7 48 c7 23 7a dc 47 72 6a b7 57 9f 9c 06 08 89 c2 27 82 bb 5b 06 f1 2e 4a a8 55 03 c1 fc 80 69 ac b5 2d a2 8b 20 41 68 33 5a eb 46 fe ab 03 c4 55 08 f3 78 6f 45 67 6e bd 6b 1e 03 4b 69 9e 32 af 8c 9a d8 55 7b 2a 2e dc 68 2a 7c fe 09 e2 c6 57 90 fe aa c1 cb 63 a1 9f c6 9f 9c 67 2c a9 a3 42 91 3d c2 84 9b de cb 0d 79 e5 7f 64 45 bb e9 df e9 a9 f1 68 13 a8 f0 90 e8 86 f9 66 56 16 d7 0f 89 03 54 10			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CMDX)	06/12/24 05:35:57 - 05/12/24 21:35:57			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.51.27			
TSP				
Fecha : (UTC/ CMDX)	06/12/24 05:35:58 - 05/12/24 21:35:58			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	197167103			
Datos estampillados:	9HtXjDqs63m0cjSVnCw9RT3/0sA=			